



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL: Acción popular
DEMANDANTE: José Amado López Malaver
DEMANDADO: Municipio de Toca
RADICACIÓN: 15001 3333 004 **2019 00171 00**

Procede el Despacho a dar apertura a la etapa probatoria por el término de veinte (20) días, al tenor de lo reglado por el artículo 28 de la Ley 472 de 1998.

DECRETO DE PRUEBAS

La prueba documental que a continuación se decreta, a juicio del Despacho, es pertinente, conducente y útil para efecto de verificar los supuestos de hecho alrededor de la vulneración de los derechos colectivos invocados en esta acción popular, las cuales fueron aportadas y solicitadas en la oportunidad debida, a las cuales se otorgará el mérito que corresponda al momento de su valoración.

De acuerdo con los artículos 18 y 22 de la Ley 472 de 1998, las oportunidades probatorias en las acciones populares están definidas en los artículos 18 y 22 de la Ley 472 de 1998, es decir, al momento de la demanda y la contestación. Ahora bien, en consideración a los documentos aportados por la entidad accionada durante la celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 27 de febrero de este año, el Despacho dispondrá su incorporación y las tendrá como tales, al advertir que las mismas consisten en: i) levantamiento arquitectónico, estudio de suelos, patología y vulnerabilidad, ii) estudio geotécnico, iii) estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural e iv) inspección y diagnóstico del estado estructural de la Casa de la Cultura (carpeta anexos), y que esta prueba documental estaba contemplada por el Juzgado para ser decretada de oficio, según el contenido de la contestación de la demanda, conforme al cual, en el decurso de la acción popular, el municipio adelantó un contrato de consultoría para establecer el estado actual del inmueble.

1. Pruebas de la parte demandante

a. Documentales aportadas:

Téngase como pruebas los documentos aportados con la demanda, que se relacionan a continuación:

- Petición radicada ante la alcaldía de Toca el 15 de julio de 2019, mediante la cual el actor popular solicitó la protección de los derechos colectivos a *“i) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, iii) la defensa del patrimonio público, iv) la defensa del patrimonio cultural de la*

nación, v) la seguridad y salubridad públicas y el vi) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente” y, en consecuencia, la adopción de las medidas pertinentes para salvaguardar a los ciudadanos del daño que representa el estado lamentable y ruinoso de la Casa de la Cultura (fs. 10-12)

b. Pruebas solicitadas:

El Despacho se abstendrá de decretar la prueba pericial solicitada por el actor popular, consistente en el estudio de patología estructural a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, teniendo en cuenta que los documentos aportados en la audiencia de pacto de cumplimiento de 27 de febrero de los corrientes (ya mencionados), dan cuenta de la situación de abandono de la Casa de Cultura, junto con el diagnóstico del estado del inmueble y demás conclusiones que arrojan varias contingencias por resolver, que agotan el propósito perseguido con el dictamen solicitado.

Por disposición del artículo 30 de la Ley 472 de 1998, la carga de la prueba corresponde al actor popular, quien, para el caso concreto, anunció su imposibilidad de continuar con el trámite de la demanda; luego, esta circunstancia permite al Despacho considerar la existencia de eventuales tropiezos o retrasos injustificados en el desarrollo del proceso, de manera que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, se estima la suficiencia de las pruebas aportadas relacionadas con el estado del inmueble objeto de esta acción popular.

2. Pruebas del municipio de Toca

a. Documentales aportadas:

Téngase como pruebas los documentos aportados con la contestación de la demanda, que se relacionan a continuación:

- Constancia de 20 de noviembre de 2019, suscrita por el secretario de gobierno del municipio de Toca, en la que certificó que en el bien denominado “Casa de la Cultura” desde hace aproximadamente un año no funciona ninguna dependencia (f. 68)
- Copia del contrato de consultoría N° MT-CC-181-2019 de 18 de noviembre de 2019, cuyo objeto fue la realización del levantamiento arquitectónico, estudio de suelos, patología y vulnerabilidad de la estructura denominada “Casa de la Cultura” (fs. 69-70).

b. Pruebas solicitadas:

- **Documentales:**

El Despacho se abstendrá de decretar las pruebas relacionadas a folio 66, toda vez que los resultados del contrato de consultoría N° MT-CC-181-2019 fueron aportados por la entidad accionada durante la diligencia de pacto de cumplimiento

y no se estima necesario oficiar a la Secretaría de Hacienda de dicha entidad para que certifique el presupuesto asignado para el sector cultura para los años 2016 a 2019.

- **Testimoniales:**

El Despacho no decretará los testimonios solicitados, al considerar que el objeto de la prueba es que las personas citadas depongan sobre la contestación de la demanda y las excepciones propuestas, sin embargo, puede advertirse su relación directa con el contrato de consultoría mencionado en este proveído, según los documentos aportados por el municipio de Toca en audiencia de pacto de cumplimiento y que, como se sostuvo, dicha prueba documental resulta suficiente e idónea para los fines probatorios perseguidos en torno a establecer la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda.

3. Ministerio Público y Defensoría del Pueblo

Los representantes del Ministerio Público y la Defensoría no aportaron ni solicitaron pruebas.

4. Pruebas de oficio

a. Documentales:

- Con fundamento en el inciso 3.º del artículo 28 de la Ley 472 de 1998, que faculta al juez para requerir informes con valor probatorio, esta Judicatura incorpora al expediente el informe que aportó la entidad accionada en la diligencia de pacto de cumplimiento, el cual cuenta con su correspondiente soporte documental y técnico, consistente en:

- i) Levantamiento arquitectónico, estudio de suelos, patología y vulnerabilidad.
- ii) Estudio geotécnico.
- iii) Estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural.
- iv) Inspección y diagnóstico del estado estructural de la Casa de la Cultura.

Dicho informe está contenido en la carpeta anexos adjunta al expediente, el cual resuelve sobre el estado actual del inmueble, los problemas allí evidenciados, el presupuesto de obra, diagnóstico en general y recomendaciones o planes por seguir.

- Oficiar al municipio de Toca para que por intermedio de la dependencia correspondiente, en el término de cinco (05) días, de acuerdo a la recomendación dada por la Secretaría Técnica de Conciliación de dicha entidad, la cual sugirió la demolición del bien, informe si ya se adjudicó contrato con este objeto o especifique las gestiones adelantadas para materializar dicho procedimiento.

En los oficios remisorios se realizarán las advertencias previstas en el artículo 44 del CGP, en caso de desatención a las órdenes judiciales.

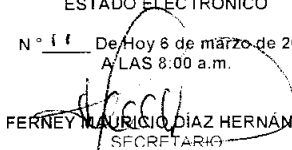
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 472 de 1998, el término probatorio se prorrogará por un lapso igual, si la complejidad del proceso lo requiere.

Finalmente, sobre la constancia que dejó el apoderado de la parte accionada en la audiencia de pacto de cumplimiento, en el sentido de indicar que ante las aseveraciones realizadas por el actor popular para justificar su inasistencia, las cuales calificó de graves al endilgar aparentemente responsabilidad en un servidor público de elección popular, y que correspondía a este allegar siquiera prueba sumaria de tales circunstancias, el Despacho considera que esta no es la instancia competente para ventilar dichos hechos, ni el escenario procesal para definirlos, de manera que se releva de adoptar alguna decisión en este sentido.

Esta Judicatura tampoco solicitará al demandante prueba sumaria, en los términos indicados en la audiencia de pacto de cumplimiento, respecto a su inasistencia a la reanudación de esta diligencia, en aplicación del principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO ELECTRÓNICO
N° 11 De Hoy 6 de marzo de 2020
A LAS 8:00 a.m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO